



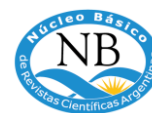
Trabajo y Sociedad

Sociología del trabajo – Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias

NB - Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (Caicyt-Conicet)

Nº 47, Vol. XXVIII, Invierno 2026, Santiago del Estero, Argentina

ISSN 1514-6871 - www.unse.edu.ar/trabajosociedad



Entre la transferencia y la deuda: programas sociales, trabajo informal y género en Argentina desde un enfoque cuantitativo.

Between transfers and debt: Social programs, informal work, and gender in Argentina from a quantitative approach.

Entre a transferência e a dívida: programas sociais, trabalho informal e gênero na Argentina a partir de uma abordagem quantitativa.

Gabriela Nieva Moreno*
Agostina Costantino*¹

Recibido: 03.02.26

Recibido con modificaciones: 09.04.26

Aprobado: 27.04.26

RESUMEN

Este artículo analiza la relación entre los programas de transferencia monetaria condicionada (PTMC), la informalidad laboral y el género en la Argentina urbana. A partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2025), se estiman modelos de regresión logística para evaluar la asociación entre la recepción de PTMC y la inserción laboral informal entre personas ocupadas, incorporando heterogeneidades por edad, región y presencia de niñas y niños menores de 10 años en el hogar. Los resultados muestran una asociación positiva entre PTMC e informalidad laboral, así como una mayor probabilidad de informalidad entre las mujeres, aun controlando por educación y edad. Se observa una superposición entre transferencias, trabajo precario y responsabilidades de cuidado. Asimismo, el análisis del endeudamiento revela una mayor propensión de las personas beneficiarias —especialmente mujeres— a recurrir al crédito informal. En conjunto, los hallazgos

* Magister en Economía del Desarrollo. Becaria interna doctoral. Instituto de Estudios laborales y Desarrollo económico, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IELDE, CONICET). Docente en el Departamento de Economía - Universidad Nacional de Salta (UNSa). gabrielanievamoreno1@gmail.com ORCID: 0009-0000-6473-2794

* Doctora en Investigación en Ciencias Sociales. Investigadora. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IIESS, CONICET). Docente en el Departamento de Economía - Universidad Nacional del Sur (UNS). agostina.costantino@uns.edu.ar ORCID: 0000-0001-7325-4026

¹ **Agradecimientos.** Se agradece el apoyo institucional de la universidad pública y del sistema científico argentino que hizo posible la producción de este artículo, así como la fuerza del intercambio colectivo que lo fortalece. Asimismo, se agradecen los comentarios y sugerencias recibidas por Carla Arévalo. Por último, les agradecemos a todas las compañeras del Programa Ellas Hacen.

sugieren que los PTMC se articulan con un régimen de reproducción social caracterizado por informalidad estructural, organización familiarista del cuidado y estrategias financieras de supervivencia, más que como instrumentos de transición hacia el empleo formal.

Palabras clave: informalidad laboral; programas de transferencia monetaria; género; reproducción social; endeudamiento; Argentina.

ABSTRACT

This article examines the relationship between Conditional Cash Transfer programs (CCTs), labor informality, and gender in urban Argentina. Using microdata from the Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2025), logistic regression models are estimated to assess the association between CCT receipt and informal employment among employed individuals, incorporating heterogeneity by age, region, and the presence of children under 10 years old in the household. The results show a positive association between CCTs and labor informality, as well as a higher probability of informality among women, even after controlling for education and age. No significant differential effects of CCTs by gender are found; however, transfers overlap with precarious employment and unpaid care responsibilities. Additionally, the analysis of indebtedness indicates a higher likelihood of informal borrowing among beneficiaries, particularly women. Overall, the findings suggest that CCTs operate within a regime of social reproduction characterized by structural informality, familistic care arrangements, and financial survival strategies, rather than functioning as pathways to formal employment.

Keywords: labor informality; cash transfer programs; gender; social reproduction; indebtedness; Argentina.

RESUMO

Este artigo analisa a relação entre os programas de transferência monetária condicionada (PTMC), a informalidade laboral e o gênero na Argentina urbana. Com base em microdados da Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2025), são estimados modelos de regressão logística para avaliar a associação entre o recebimento de PTMC e a inserção em empregos informais entre pessoas ocupadas, incorporando heterogeneidades por idade, região e presença de crianças menores de 10 anos no domicílio. Os resultados indicam uma associação positiva e robusta entre PTMC e informalidade laboral, bem como uma maior probabilidade de informalidade entre as mulheres, mesmo após o controle por escolaridade e idade. Não são observados efeitos diferenciais significativos do programa segundo o gênero, mas evidencia-se a sobreposição entre transferências, trabalho precário e responsabilidades de cuidado. Além disso, a análise do endividamento mostra maior propensão ao crédito informal entre beneficiários, especialmente mulheres. Em conjunto, os achados sugerem que os PTMC se articulam a um regime de reprodução social marcado pela informalidade estrutural, pela organização familiarista do cuidado e por estratégias financeiras de sobrevivência, mais do que como mecanismos de transição para o emprego formal.

Palavras-chave: informalidade laboral; programas de transferência monetária; gênero; reprodução social; endividamento; Argentina.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN; 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN; 3. INFORMALIDAD LABORAL, TRABAJO DECENTE Y POLÍTICAS DE TRANSFERENCIA; 3.1 PTMC y mercado de trabajo: debates sobre informalidad, segmentación y trabajo decente; 3.2 Género, cuidados y estrategias de subsistencia: el impacto de las políticas sociales y el endeudamiento; 4. DATOS Y ESTRATEGIA METODOLÓGICA; 5. RESULTADOS; 6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES; 7. REFERENCIAS.

1. Introducción

En la Argentina urbana, la persistencia de elevados niveles de informalidad laboral constituye uno de los principales desafíos estructurales para la inclusión social y laboral. Según datos del INDEC, en el primer trimestre de 2025 el 42% de las personas ocupadas se encontraba en situaciones de informalidad, lo que da cuenta de un mercado de trabajo profundamente segmentado y con limitadas capacidades de absorción de empleo formal. En este contexto, el Estado argentino ha consolidado en las primeras décadas del siglo XXI una red de protección social basada en PTMC, que han sido centrales para reducir la pobreza y garantizar un piso de ingresos, pero cuya capacidad para promover una inserción laboral de calidad continúa siendo objeto de debate.

La literatura internacional ha analizado los PTMC principalmente en relación con la reducción de la pobreza y la mejora de indicadores de educación y nutrición (Fiszbein y Schady, 2009; Baird, McIntosh y Özler, 2010), mientras que su vínculo con la participación laboral —en particular la femenina— ha recibido menor atención. Si bien existe una base sólida de evaluaciones de impacto que documentan mejoras en resultados sociales, la evidencia sobre los efectos laborales es más heterogénea y depende en gran medida del diseño específico de los programas, el contexto institucional y las condiciones del mercado de trabajo. En esta línea, algunos estudios sugieren que las transferencias monetarias condicionadas pueden tener efectos neutros o incluso negativos sobre la oferta laboral femenina al reforzar roles tradicionales de cuidado, mientras que otros no encuentran impactos estadísticamente significativos sobre la probabilidad de empleo formal o informal (Garganta et al., 2015; Rodríguez Enríquez, 2011).

En el caso argentino, los análisis se han concentrado mayormente en la evaluación del impacto de estos programas sobre la pobreza y la desigualdad, con especial énfasis en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y sus efectos sobre las condiciones de vida de los hogares. Si bien la perspectiva de género está presente en parte de esta literatura, suele abordarse a partir de la feminización de la pobreza y del aumento de las responsabilidades de cuidado, más que desde el análisis de las trayectorias laborales de las mujeres (Carcedo Cabañas & Kennedy, 2017). Desde este enfoque, diversos trabajos advierten que los programas sociales pueden contribuir a la reproducción de roles tradicionales, lo que podría limitar la inserción femenina en el empleo formal o facilitar su incorporación en formas de empleo informal con menor protección social.

No obstante, son escasos los estudios que examinan de manera sistemática cómo las transferencias monetarias condicionadas se vinculan con la probabilidad de inserción en empleos formales o informales, integrando variables del mercado de trabajo, mecanismos de género y características del diseño de las políticas. Esta ausencia señala una brecha relevante en la literatura, que requiere abordajes empíricos que articulen la discusión sobre informalidad laboral, género y programas sociales (Pérez Giraldo, 2018; Rodríguez Enríquez, 2011).

El propósito central de esta investigación es analizar la relación entre la recepción de programas de transferencia monetaria condicionada (PTMC) y la informalidad laboral en los centros urbanos de Argentina durante el año 2025. En un escenario signado por las reformas socioeconómicas impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, el estudio examina cómo estas transferencias se articulan con las trayectorias laborales, prestando especial atención a las disparidades de género y a

la heterogeneidad a lo largo del ciclo de vida y entre regiones. En este marco, se analizan las brechas de género en la probabilidad de inserción informal asociadas a los PTMC, se incorpora el peso de las tareas de cuidado como condicionante de la informalidad femenina, y se explora la asociación entre la condición de beneficiario de estos programas y los niveles de endeudamiento, tanto formal como informal, controlando por variables sociodemográficas clave como el nivel educativo y la ubicación geográfica.

Metodológicamente, se utilizan microdatos del primer trimestre de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y se estiman modelos de regresión logística para analizar asociaciones significativas entre programas sociales, género, informalidad y deuda, sin pretensión de identificación causal.

Enmarcado en este análisis estructural, el trabajo se inscribe en un contexto reciente de reformas en la política social impulsadas por la gestión de La Libertad Avanza, que asumió en diciembre de 2023, y de creciente intermediación financiera en la gestión de los beneficios, que reconfiguran las condiciones bajo las cuales se articulan las transferencias monetarias, el trabajo informal y las estrategias económicas de los hogares. Estas transformaciones refuerzan la pertinencia de examinar empíricamente el modo en que los PTMC se insertan en un mercado de trabajo segmentado y atravesado por persistentes desigualdades de género.

En términos de aporte, el artículo busca contribuir al debate académico sobre políticas de transferencia, informalidad y género mediante evidencia cuantitativa reciente para la Argentina urbana, integrando herramientas econométricas aplicadas a microdatos de hogares con una interpretación estructuralista y feminista del mercado de trabajo.

2. Estado de la cuestión

La relación entre PTMC y el mercado de trabajo ha sido extensamente estudiada en América Latina. En general, la literatura ha mostrado que estos programas no generan desincentivos laborales de magnitud, especialmente cuando los beneficios son acotados y los controles efectivos (Fiszbein y Schady, 2009). En Argentina, investigaciones como las de Garganta y Gasparini (2015) han explorado los efectos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), programa que inicia en 2009, encontrando impactos positivos en la reducción de la pobreza y mejoras en la escolarización, aunque con efectos mixtos sobre la oferta laboral. Luego, Neidhofer *et al* (2025) analizan los efectos a largo plazo de la PTMC más grande de América Latina: la Bolsa Familia brasileña. Las condicionalidades históricamente asociadas a este programa incluyen la asistencia escolar regular de niñas, niños y adolescentes, el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles periódicos de salud materno-infantil. Estas contraprestaciones resultan centrales para comprender la lógica de los PTMC en la región, en tanto vinculan la transferencia de ingresos con objetivos de acumulación de capital humano. Los autores concluyen que existe evidencia consistente de un efecto positivo significativo en la educación y los ingresos laborales de los beneficiarios antiguos, y un efecto negativo en la probabilidad de ser titular actual de esta transferencia social.

En el ámbito local, se ha puesto el foco en el programa Potenciar Trabajo (2020), que combinaba transferencias con contraprestaciones laborales. Cabe precisar que la AUH fue implementada en 2009, mientras que Potenciar Trabajo fue creado en 2020, en un contexto de profundización de la vulnerabilidad socioeconómica y posterior crisis sanitaria. Esta precisión temporal resulta relevante para distinguir programas con diseños institucionales y objetivos parcialmente diferentes dentro del sistema de protección social argentino. Este esquema ha revitalizado la discusión sobre los límites del “trabajo asociado a la política social” y su capacidad real de integrar al empleo formal (Poy, 2021). En este contexto, resulta necesario actualizar la evidencia empírica considerando los cambios recientes en el mundo del trabajo y en el diseño de la política social llevada adelante por el gobierno de LLA. También para Poy y Repetto (2025), estas modificaciones se basaron en la reducción del gasto social global, la priorización de prestaciones condicionadas y focalizadas en la infancia (en detrimento de aquellas dirigidas a jóvenes y personas en edad activa) y un cambio en las modalidades de gestión, orientado a debilitar la presencia de organizaciones socio-comunitarias.

En ese sentido, Costantino (2024) señala que, en relación con la participación laboral, durante enero y febrero de 2024 la ejecución presupuestaria del programa Potenciar Trabajo se redujo en términos reales un 71%, según un informe de ACIJ-ELA. El gobierno de La Libertad Avanza dispuso la transformación de este programa en dos nuevos esquemas: Volver al Trabajo (PVT) y Acompañamiento Social (PAS). El primero busca desarrollar y consolidar competencias sociolaborales que permitan a los beneficiarios alcanzar un nivel inicial de empleabilidad y mejorar sus oportunidades de inserción, a través de actividades de formación, prácticas en ámbitos laborales y apoyo al desarrollo de emprendimientos productivos, tanto individuales como asociativos. El PAS, en cambio, se orienta a personas mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. En ambos casos, la retribución dejó de calcularse como un porcentaje del salario mínimo para convertirse en un monto fijo, lo que implica una pérdida significativa de poder adquisitivo en un contexto de alta inflación, a la vez que se incorporaron nuevas incompatibilidades con otras fuentes de ingreso.

En un trabajo en el que se analizan la evolución y las desigualdades de género en el empleo, los ingresos, la pobreza y la indigencia en las trabajadoras argentinas a lo largo de los años 2019-2023, Messina (2025) plantea la relación tradicional que existió entre el sistema de protección social contributivo y la figura del trabajador varón formal proveedor del hogar. En las últimas décadas, han tomado protagonismo en la región latinoamericana las políticas sociales no contributivas. En Argentina, en particular, las prestaciones no contributivas han ayudado a la expansión del sistema previsional gracias a la moratoria previsional; del sistema de asignaciones familiares, gracias a la asignación universal por hijo/por embarazo (AUH/AUE); y de la protección de la población en edad de trabajar, gracias a la expansión de los programas de empleo, popularmente conocidos como “planes sociales” (Messina, 2025).

3. Informalidad laboral, trabajo decente y políticas de transferencia

Se abordará la informalidad laboral en relación con los programas de transferencia monetaria condicionada (PTMC) a partir de distintos ejes. En primer lugar, se presenta la noción de trabajo decente como horizonte normativo y se delimita el concepto de informalidad laboral, incluyendo sus formas de medición y su inscripción en la heterogeneidad estructural de América Latina. A continuación, se examina el debate entre las interpretaciones que conciben la informalidad como resultado de procesos de exclusión y aquellas que la explican como una elección de los trabajadores. Luego, se analizan los PTMC, sus fundamentos y su relación con la segmentación del mercado de trabajo. Finalmente, se incorporan los aportes de la economía feminista para abordar el vínculo entre políticas sociales, género, endeudamiento y tareas de cuidado no remuneradas, como dimensiones centrales para comprender las trayectorias laborales en contextos de desigualdad.

3.1 PTMC y mercado de trabajo: debates sobre informalidad, segmentación y trabajo decente

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por las Naciones Unidas en 2015 se proponen luchar contra la pobreza extrema, por medio de tres dimensiones esenciales del desarrollo sostenible como son la económica, la social y la ambiental. Esta agenda proporciona una hoja de ruta para articular la formulación de políticas mundiales. Dentro de los mismos, el ODS 8 plantea “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el *trabajo decente* para todos”.

El concepto de trabajo decente fue definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1999. Entonces se concluyó que el trabajo decente implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los derechos básicos del trabajo. Estos derechos garantizan que no haya discriminación ni hostigamiento, que se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas económicas, sociales y familiares, y que se logre un nivel de protección social para el trabajador, la trabajadora y los miembros de su familia. Estos derechos también incluyen

el derecho de expresión y de participación laboral a través de organizaciones representativas elegidas por los trabajadores (OIT, 1999).

Luego, la OIT (2002) subraya la importancia de poner el énfasis, ante todo, en el extremo informal de la economía porque es allí donde los déficits de trabajo decente son más pronunciados. De esa manera, promover el trabajo decente en todo el universo continuo de la actividad económica, que abarca desde el sector informal hasta el sector formal, aplicando enfoques orientados al desarrollo, la reducción de la pobreza y la igualdad de género.

Autores han problematizado críticamente esta definición institucional de trabajo decente, señalando su carácter normativo y sus efectos en la manera de pensar el desarrollo y la regulación laboral. En esta línea, Lijterman (2020) sostiene que el trabajo decente no funciona solo como una categoría descriptiva, sino como un dispositivo programático que propone una visión ideal de la formalidad laboral “posible y deseable” en el marco de la globalización. Según la autora, esta reformulación reconfigura la relación entre formalidad e informalidad: desplaza las explicaciones estructurales clásicas y privilegia una lectura gradual, fragmentada y secuencial de los procesos de formalización. De este modo, la informalidad pasa a ser tratada como un problema en sí mismo — económico, social y político—, habilitando intervenciones segmentadas y de largo plazo que redefinen los sentidos de la protección social y consolidan una nueva forma de regulación del trabajo acorde al paradigma de la globalización “inclusiva”.

En este trabajo se retoma un aspecto del trabajo decente vinculado a los derechos básicos de formalidad laboral, como condición necesaria y mínima para que aquel se dé. El recorrido sobre el concepto de informalidad tiene sus orígenes en 1971 cuando Keith Hart presentó una conferencia sobre desempleo urbano en África. El mismo se desprende de la investigación del autor sobre un grupo del norte de Ghana, los Frafra. El trabajo describe y analiza las estrategias de generación de ingresos de los inmigrantes en Accra - a quienes Hart denomina subproletariado urbano -. Como los salarios no alcanzaban, las personas recurrían a diversas alternativas como crédito de familiares y de amigos, duplicación del trabajo asalariado, y diversos medios “informales” para incrementar los ingresos (Rabossi, 2019).

Portes y Haller (2004) definen la economía informal como toda acción de los agentes económicos que permanece al margen de las normas institucionales establecidas. En concreto, Camisassa (2021) define al trabajo informal como aquel en el cual la relación laboral no está sujeta a la legislación laboral e impositiva, y en consecuencia el trabajador no tiene acceso a beneficios sociales ni ciertos derechos laborales ligados al empleo.

No solo son trabajadores en espera de oportunidades de creación de empleo asalariado formal, sino que se van consolidando como un extenso sector de trabajadores excluidos que buscan alternativas para la generación de ingresos ante la falta permanente de oportunidades en el sector formal (Trujillo-Salazar y Villafañe, 2021).

La conceptualización y medición de lo que se entiende por informalidad laboral en Argentina responde a construcciones variadas de la problemática, en función tanto de sus fronteras grises y permeables como de las posibilidades de medición. La definición oficial que toma la Argentina se centra en un enfoque legalista, a partir del cual se considera si la persona está o no registrada en el sistema de seguridad social (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021).

En América Latina, la persistencia de altos niveles de informalidad no puede comprenderse únicamente como una falla regulatoria o una elección individual, sino que se inscribe en un patrón de heterogeneidad estructural. Este concepto, desarrollado por la CEPAL, alude a la coexistencia de sectores con muy distintas productividades, capacidades tecnológicas y niveles de protección laboral, que generan una estructura segmentada del mercado de trabajo. En este contexto, la informalidad no representa una etapa transitoria hacia el empleo formal, sino un componente estructural del modelo de desarrollo, que concentra a los trabajadores con menores niveles de capital educativo, ingresos y protección social (Cimoli *et al.*, 2005).

Uno de los aspectos a tener cuenta al estudiar la informalidad es su carácter voluntaria o impuesta. De acuerdo a la teoría de “exclusión”, los trabajadores informales son parte de un grupo en desventaja,

que han sido excluidos de los beneficios otorgados por el Estado y de los circuitos de la economía moderna. En contraste a esta teoría, la visión integrada pone énfasis en el carácter voluntario del trabajo informal. Los individuos pueden elegir trabajos informales voluntariamente: dadas sus preferencias, habilidades, formas alternativas de protección social y su valuación personal de costos y beneficios del trabajo formal e informal, ciertos trabajadores optan por el “escape”. Por ejemplo, para Tornarolli y Conconi (2007) ser informal es óptimo para algunos trabajadores. Esta teoría es puesta en diálogo, por ejemplo, por un estudio que evidencia mejores ingresos para los trabajadores del segmento formal. Para Paz (2021) un trabajador asalariado que se desempeña como tal en el segmento no regulado de la economía es quien percibe la remuneración más baja del conjunto de ocupados, incluidos los trabajadores por cuenta propia no profesionales, que también suelen ser vistos como parte del segmento no formal. Esto evidencia “premios a la formalidad y castigos a la informalidad en términos de pago”.

Luego, analizamos la relación entre informalidad y pobreza. La razón de chances de ser pobre - frente a no serlo- entre los trabajadores informales es cuatro veces superior a la que registran los formales. En particular, el riesgo de pobreza es más alto entre las personas asalariadas no registradas del sector informal, las trabajadoras de servicio doméstico y los cuentapropistas informales (Poy, 2024).

Por último, distintos trabajos muestran la incidencia de género en el sector informal; en un estudio sobre la segregación ocupacional por género en la Argentina, Paz (2020) indica que la proporción de mujeres ocupadas en la fuerza laboral informal entre todas las mujeres es mayor que la proporción de hombres ocupados en la fuerza laboral informal entre todos los hombres. Con datos de la OIT (2004), Bueno Castellanos (2009) sostiene que, en la última década del siglo XX, a escala mundial, el porcentaje de mujeres casi duplica al de hombres en el sector informal. Esta diferenciación es aún más aguda en Asia donde, de cuatro personas que trabajan en la informalidad, tres son mujeres.

Para un estudio de indicadores laborales de la crisis sanitaria por COVID-19, Minoldo y Dvoskin (2023) indican que en el segundo trimestre de 2020 las ocupaciones asalariadas informales se derrumbaron. Cayeron en torno al 45% tanto las femeninas como las masculinas (para poner en perspectiva, en el momento que más cayeron las ocupaciones masculinas asalariadas formales, habían perdido en torno al 5,6% de las ocupaciones). Al comenzar la recuperación en III-T 2020, las ocupaciones asalariadas informales masculinas crecieron a un ritmo más acelerado y sostenido que las femeninas. Hacia el final de la serie no se había recuperado el número de ocupaciones asalariadas informales previo a la pandemia, pero el rezago era mayor entre las mujeres, que todavía tenían un 18,4% de ocupaciones menos que en el primer trimestre mientras los varones un 6%.

El mismo trabajo indica que el papel de los subsidios en la mitigación de la pérdida de ingresos femeninos podría ser lo que explica que, a pesar del rezago de los indicadores femeninos durante la recuperación económica, no se haya profundizado el fenómeno conocido como feminización de la pobreza.

Los PTMC son políticas sociales que otorgan transferencias directas a hogares en situación de vulnerabilidad, a cambio del cumplimiento de ciertos requisitos, como la asistencia escolar o controles de salud. Buscan complementar los recursos del individuo o del hogar para aliviar la pobreza en el corto plazo y la primera opción que se presenta es si transferir dinero o especies (alimentos, vestimenta, etc.). Quizás el principal argumento a favor de las transferencias en dinero sea que permite mayor eficiencia en el consumo porque los individuos u hogares conocen mejor sus necesidades y preferencias que el Estado (Marchionni y Conconi, 2008).

En Argentina, el programa más representativo es la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementado desde 2009, cuya compatibilidad con el empleo se encuentra restringida a inserciones laborales informales o de bajos ingresos, lo que configura de hecho un esquema segmentado de acceso a la protección social. A ello se suma el programa Potenciar Trabajo —posteriormente reconfigurado en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social—, que buscaba articular la asistencia con la participación en proyectos socioproductivos, tareas comunitarias o instancias de formación laboral. Bajo su diseño original, Potenciar Trabajo presentaba mayores restricciones de compatibilidad con el

empleo formal, en tanto la percepción del beneficio se vinculaba a contraprestaciones y a límites más estrictos respecto de ingresos registrados. Este aspecto institucional resulta particularmente relevante para la interpretación de los resultados empíricos, dado que las incompatibilidades parciales con el empleo formal pueden generar un sesgo de selección en la población beneficiaria. En otras palabras, la propia arquitectura normativa de los programas contribuye a concentrar a las personas receptoras en segmentos informales o de baja registración, lo que refuerza la necesidad de interpretar la asociación observada entre PTMC e informalidad como parte de un entramado institucional y no exclusivamente como una decisión individual de oferta laboral.

En 2024, el gobierno de La Libertad Avanza modificó este esquema al redefinir las condiciones de acceso y permanencia en el programa Volver al Trabajo, ampliando las compatibilidades laborales. En su configuración actual, las personas beneficiarias pueden estar inscriptas en el monotributo social o en el monotributo categoría A, desempeñarse en el régimen de trabajo en casas particulares o en actividades rurales, temporarias o estacionales, así como acceder a empleos en el sector público o privado iniciados con posterioridad a su incorporación al programa, siempre que la remuneración no supere los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Asimismo, se habilita la compatibilidad con empleos formales en relación de dependencia en el marco del Programa de Inserción Laboral, sin aplicación de dicho tope. A diferencia del esquema previo de Potenciar Trabajo, que presentaba mayores restricciones de compatibilidad con empleos registrados y vinculaba la percepción del beneficio al cumplimiento de contraprestaciones comunitarias o socioproductivas, el nuevo diseño flexibiliza la permanencia en el programa frente a determinadas inserciones laborales formales. Este cambio institucional es particularmente relevante para el análisis de la informalidad, ya que modifica los incentivos y restricciones que enfrentan las personas beneficiarias al momento de insertarse en el mercado de trabajo.

Autores como Hornes y Maglioni (2020) y De Sena (2020) realizan un recorrido sobre el desarrollo de las políticas para atacar la pobreza. Los primeros desde la experiencia de monetización reciente de las políticas sociales en la Argentina y sobre la accesibilidad considerando el plano de las decisiones políticas y técnicas que delimitan el horizonte de las necesidades sociales de los sectores pobres.

Luego, De Sena (2020) realiza un recorrido histórico donde se vislumbra la impronta que cada gobierno le imprime al programa. Se puede observar cómo se transforman las políticas de asistencia hacia aquellas que, se proponen, un mayor desarrollo humano. A su vez, la autora, con datos del Observatorio Social, identifica que en 2018 se había ampliado la base de sujetos en condición de pobre como población receptora de programas sociales, y que esto da paso a una heterogeneidad, tanto en la conformación de la pobreza, como de beneficiarios de intervenciones.

De Sena (2020) indica que se van diseñando nuevos programas que se definen como transitorios pero que se convierte prontamente en permanentes y que, además, empiezan a captar, progresivamente mayores cantidades de beneficiarios.

Marchionni (2018) realizan un análisis de impacto del PTMC Asignación Universal por Hijo en Argentina, en el cual destacan la dualidad de objetivos de los PTMC; mientras las transferencias monetarias buscan protección económica; por otra parte, las condicionalidades persiguen la promoción social: aumentar la acumulación de capital humano para reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza.

Por último, autores como Levy (2008) concluyen que en América Latina las políticas de protección social no contributivas, lejos de ser un complemento transitorio del empleo formal, han contribuido a consolidar un sistema segmentado de protección social. Este sistema se organiza en dos regímenes paralelos: uno contributivo, asociado al empleo formal, y otro no contributivo, dirigido a trabajadores informales y hogares pobres. De este modo, las transferencias monetarias y los programas sociales no actúan como un puente hacia el empleo formal, sino que pasan a formar parte de un arreglo estructural que reproduce la segmentación del mercado de trabajo.

A este entramado institucional se suma una dimensión operativa que no remite solo a ingresos, sino a la forma en que los PTMC reordenan las estrategias laborales de los hogares. Como muestra

Hornes (2013), las transferencias monetarias permiten sostener combinaciones de ingresos basadas en trabajos intermitentes, changas y cuentapropismo informal, reduciendo la presión por acceder a empleos formales de muy baja calidad. Es decir, no reemplazan al trabajo, sino que lo vuelven compatible con trayectorias laborales fragmentadas. Al mismo tiempo, estos programas consolidan una lógica de “activación” permanente, en la que los beneficiarios no son reconocidos como trabajadores con derechos, sino como sujetos a capacitar, acompañar o reinsertar, aun cuando el mercado de trabajo no ofrece alternativas estables. En este sentido, los PTMC no solo intervienen sobre el ingreso, sino que participan en la configuración de trayectorias laborales específicas dentro de un mercado de trabajo segmentado.

3.2 Género, cuidados y estrategias de subsistencia: el impacto de las políticas sociales y el endeudamiento

Estudios empíricos como los realizados por los autores Ranis y Stewart (2002) indican que los principales eslabones de la cadena que va del crecimiento económico al desarrollo humano se relacionan con, entre otras cosas, la tendencia de los hogares a invertir sus ingresos en rubros que en los países pobres contribuyen más directamente a promover el desarrollo humano, por ejemplo, alimentos, agua potable, educación y salud. Al parecer, uno de los principales factores determinantes es la proporción del ingreso que es controlada por las mujeres (Ranis y Stewart, 2002). En otro artículo, se identifica que, en distintos países, los autores concluyen que, a mayor educación de las mujeres, las compras se orientan a alimentación y educación, y se reducen la ingesta de alcohol y tabaco (Ranis *et al.*, 2000).

Las autoras Alonso y Rodríguez Enríquez (2024) realizan una relectura del abordaje estructuralista desde la economía feminista para pensar el excedente de la fuerza de trabajo en Argentina. Concluyen que persiste estructuralmente exclusión y desigualdad de género producto de la articulación entre los rasgos laborales del estilo de desarrollo argentino y el patrón de política asistencial consolidado. Dicho patrón se apoya en las transferencias monetarias condicionadas y resulta funcional a la feminización del excedente de la fuerza de trabajo durante las dos primeras décadas del siglo XXI.

En el mismo sentido, Brown (2024) desarrolla cómo la reproducción de estereotipos de género también moldea los excedentes que genera la acumulación de capital. Señala que los PTMC reconocerían tareas -como el cuidado-, las valorizaría -transfiriendo ingresos- y compensaría -parcialmente- los problemas de pobreza e indigencia, sin embargo, establece parámetros de normalidad -roles de género-, reproduce la división sexual del trabajo -que relega a las mujeres a un papel de subordinación- y configura una lógica familiarista en la política asistencial abocada a la regulación de la reproducción social y contención de la población excluida.

Esta problemática que asocia a las mujeres con los PTMC, se profundiza en el gobierno de LLA, en el que la reducción de programas sociales y la promoción de valores conservadores afectan específicamente a las mujeres, exacerbando las desigualdades existentes y violando principios internacionales de derechos humanos que prohíben la regresividad en la protección de estos derechos (Costantino, 2024).

La avanzada de LLA sobre los programas sociales se articula además con la financiarización de la vida cotidiana, donde actores como las billeteras virtuales adquieren un rol central: quienes cobran las prestaciones de ANSES, pueden elegir que se las depositen en dicha billetera virtual. Tal como plantean Cavallero y Gago (2019), en un estudio sobre la deuda en la Villa 31, esta dinámica instala una deuda sobre los cuerpos de las mujeres: mientras se recortan o condicionan derechos, se promueve el endeudamiento privado para cubrir necesidades básicas, trasladando la responsabilidad de la subsistencia a las propias mujeres y feminizando la carga de la crisis. De esta manera, los PTMC bajo el actual esquema no solo refuerzan la lógica familiarista y la subordinación de género, sino que también consolidan un entramado de explotación financiera que captura el tiempo, el trabajo y los cuerpos de las mujeres.

En el año 2023, la CEPAL junto al Ministerio de Economía publicaron un informe que muestra que en hogares de ingresos bajos o inestables predomina el uso del financiamiento como una estrategia para sostener consumos corrientes frecuentemente ligados al cuidado, como el pago del alquiler, la educación, la salud o, incluso, el consumo de alimentos. La encuesta realizada muestra que el 63,8% de los hogares utilizó los créditos/préstamos solicitados para costear gastos en comida y medicamentos, un porcentaje que asciende al 65,4% en el caso de los hogares cuyo principal sostén son mujeres.

El término “cuidado” se utiliza de manera amplia y, en muchos casos, ambigua, lo que tiende a difuminar distinciones analíticas relevantes. En la literatura sobre países en desarrollo, el foco se ha puesto principalmente en el trabajo de cuidados y reproducción no remunerado (TCNR), dado que este representa la mayor proporción del tiempo de trabajo de las mujeres. Esta centralidad empírica ha permitido visibilizar una dimensión históricamente relegada de la economía, pero también ha evidenciado la necesidad de conceptualizar el cuidado como un fenómeno estructural y no meramente doméstico.

Desde una perspectiva feminista crítica del marxismo clásico, Silvia Federici (2018) sostiene que la promesa capitalista de liberar a la humanidad del trabajo mediante el progreso tecnológico se apoya en una definición restrictiva y androcéntrica del trabajo, limitada a la producción de mercancías. Esta concepción excluye las actividades necesarias para la reproducción cotidiana de la vida, como el cuidado, la crianza y el sostenimiento material y afectivo de las personas. Al incorporarlas como trabajo, se vuelve evidente que el TCNR constituye uno de los principales “sectores” de la economía global y que, lejos de reducirse, permanece estructural y mayoritariamente no remunerado.

En la misma línea, Folbre (2018) define el cuidado como un componente central, pero invisibilizado de la economía, en tanto sostiene la reproducción social y el desarrollo de las capacidades humanas. Para la autora, el cuidado forma parte de una economía ampliada que incluye trabajo no remunerado, transferencias no mercantiles y servicios pagos. En los países en desarrollo, este trabajo es realizado mayoritariamente por mujeres sin remuneración, lo que refuerza la división sexual del trabajo y limita su autonomía económica. La exclusión del cuidado no remunerado del Sistema de Cuentas Nacionales conduce a una subvaloración sistemática de su aporte social y económico.

Luego, Staab (2020) subraya que estas tareas recaen de forma desproporcionada sobre las mujeres y que, cuando no existen servicios accesibles y confiables que acompañen estas responsabilidades, el cuidado no remunerado se traduce en trayectorias laborales más inestables, menores ingresos y mayor vulnerabilidad económica.

Finalmente, Arévalo (2025) realiza un estudio sobre estrategias de madres trabajadoras. La evidencia muestra que las madres ocupadas y otras mujeres del hogar son las principales cuidadoras de los niños, y que la participación de los padres es relativamente menor. La contratación del servicio de cuidado es una realidad solo para 11,2% de las madres trabajadoras. Las ofertas gratuitas no parecen ser una opción real, solo 1,5% de las mujeres ocupadas resuelve el cuidado en instituciones públicas o a través de organización comunitarias. E identifica que las mujeres ocupadas más educadas (de mayor nivel económico) recurren más a los familiares, que las menos educadas.

4. Datos y estrategia metodológica

El presente estudio adopta un enfoque cuantitativo, de corte transversal, basado en microdatos correspondientes al primer trimestre de 2025 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – Total Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La EPH releva información socioeconómica de los hogares en los principales aglomerados urbanos del país y constituye la principal fuente oficial para el análisis del mercado de trabajo en Argentina.

La unidad de análisis son las personas ocupadas al momento de la encuesta. Se consideran únicamente individuos en edad activa, para los cuales se dispone de información sobre género, edad, nivel educativo, región de residencia, recepción de PTMC y estrategias de financiamiento, tanto

formales como informales. El diseño muestral complejo de la EPH se tiene en cuenta mediante el uso de factores de expansión provistos por el INDEC.

Se construyen variables dependientes diferenciadas según los objetivos del estudio. La informalidad laboral se define como la ausencia de aportes jubilatorios en la ocupación principal, siguiendo el criterio legalista utilizado por la estadística oficial. Asimismo, se consideran dos indicadores de endeudamiento: i) endeudamiento informal; y ii) endeudamiento formal.

Las principales variables explicativas son el género², la recepción de PTMC y el término de interacción entre ambas. Este término permite evaluar si la asociación entre los programas y las variables de resultado difiere según el género. Como variables de control se incluyen la edad y su cuadrado (para capturar posibles relaciones no lineales a lo largo del ciclo de vida), el nivel educativo alcanzado y la región geográfica

Cuadro 1: Variables utilizadas

Variable	Nombre	Tipo	Definición operativa	Codificación
Informalidad laboral	informal	Dependiente	Persona ocupada sin aportes jubilatorios en su ocupación principal	1 = informal / 0 = formal
Recepción de PTMC	ptmc / (pp07b1_01)	Independiente principal	Percepción de plan de gobierno que no sea AUH	1 = recibe / 0 = no recibe
Género	ch04	Independiente	Sexo/género declarado en la EPH	1 = mujer / 0 = varón
Interacción PTMC × género	i.ptmc##i.ch04	Término interactivo	Diferencial del efecto del PTMC según género	Producto de ambas dummies
Edad	edad1	Control	Edad en años	
Edad al cuadrado	edad2	Control	Captura no linealidad en el ciclo de vida	
Nivel educativo	años_educaprox	Control	Años aproximados de educación formal	
Grupo etario	edad_grupo	Independiente (OE2)	Tramos de edad. Juventud es referencia	1 = 18–29; 2 = 30–49; 3 = 50+
Región	reg2 a reg6	Control	Región de residencia (GBA de referencia)	Dummies regionales
Deuda informal	v14	Dependiente (OE4)	Préstamos a familiares o amigos	1 = sí / 0 = no
Deuda formal	v15	Dependiente (OE4)	Préstamos a bancos/financieras	1 = sí / 0 = no

² En la EPH se emplea la variable **ch04**, originalmente denominada 'sexo', como aproximación al género de las personas relevadas. Si bien la categoría no refleja la diversidad de identidades de género existentes, se utiliza en este trabajo como dicha dimensión, en línea con las posibilidades que ofrece la base de datos.

Cuidados de menores	ix_men10	Dependiente (OE5)	Presencia de menores de 10 años en el hogar	
Factor de expansión	pondera	Peso muestral	Expande la muestra a población urbana	pweight

Fuente: Elaboración propia

Dado que las variables dependientes son dicotómicas, se emplean modelos de regresión logística (*logit*). Este tipo de modelo permite estimar la probabilidad condicional de ocurrencia de un evento, restringiendo los valores predichos al intervalo (0,1) y modelando la relación entre las variables explicativas y el logaritmo de las chances (*odds*) del evento. En términos formales, el modelo *logit* se deriva de la función logística acumulada y pertenece a la familia de los modelos lineales generalizados, con distribución binomial y función de enlace *logit* (Wooldridge, 2010; Long y Freese, 2014). A diferencia del modelo de probabilidad lineal, el *logit* no impone una relación lineal entre las covariables y la probabilidad, sino entre estas y el logaritmo de las odds, lo que garantiza coherencia probabilística y una interpretación económica más robusta.

Formalmente, el modelo puede expresarse como:

$$P(Y_i = 1|x) = \frac{e^{x\beta}}{1+e^{x\beta}} \quad (1)$$

donde:

- Y es un vector n×1 de la variable dependiente (trabajo informal o endeudamiento)
- X es una matriz n×k con las variables explicativas: género, edad, edad al cuadrado, años de escolaridad, y cuidados en el último modelo. También se incluyen *dummies* de la residencia en diferentes regiones.
- β es un vector k×1 de coeficientes.

La interpretación de los coeficientes se realiza a través cociente entre la probabilidad de que la persona esté informal y la probabilidad de que no lo esté, lo que en la literatura se suele denominar *odds ratio* (OR). De este modo:

Si $\beta > 0 \Rightarrow OR > 1$

Si $\beta < 0 \Rightarrow OR < 1$

Si $\beta = 0 \Rightarrow OR = 1$

Esto es, si la variable X tiene relación positiva con la probabilidad de que Y sea 1, el OR es mayor que 1, pues la propensión de la persona a estar informal aumenta ante aumentos unitarios de la variable. Sucede lo mismo de manera inversa. Luego, cuando X no tiene relación con la condición de informalidad, el OR es igual que 1 pues las probabilidades involucradas son iguales.

Las estimaciones se realizan con errores estándar robustos y ponderación por el factor de expansión muestral (*pweight*), con el fin de obtener inferencias consistentes y representativas de la población urbana.

Dado el carácter transversal de los datos, los resultados deben interpretarse como asociaciones estadísticas y no como relaciones causales. Sin embargo, el enfoque adoptado permite identificar patrones sistemáticos relevantes para comprender la articulación entre informalidad laboral, protección social y reproducción económica en contextos de alta segmentación del mercado de trabajo.

5. Resultados

Los resultados de los modelos de regresión logística estimados para analizar la relación entre la recepción de PTMC, el género y la inserción laboral informal entre las personas ocupadas en la Argentina urbana incorporan progresivamente distintas dimensiones analíticas —ciclo de vida, región de residencia y presencia de niñas y niños menores de 10 años en el hogar— con el objetivo de identificar tanto efectos directos como posibles heterogeneidades en la probabilidad de informalidad

laboral. En todos los casos se reportan *odds ratios* estimados con errores estándar robustos y ponderados por el factor de expansión muestral de la EPH.

Tabla 1: Modelos logísticos para la probabilidad de inserción laboral informal. Odds ratios. Población ocupada urbana. EPH 2025.

	Modelo (1)	Modelo (2)	Modelo (3)
PTMC	2.816** (1.386)	1.939** (0.597)	2.779** (1.373)
Género	1.461*** (0.084)	1.461*** (0.085)	1.463*** (0.085)
PTMC#Género	0.916 (0.295)		0.923 (0.299)
Edad	0.883*** (0.010)	0.887*** (0.022)	0.883*** (0.010)
Edad ²	1.001*** (0.000)	1.001*** (0.000)	1.001*** (0.000)
Años de educación	0.870*** (0.007)	0.863*** (0.007)	0.870*** (0.007)
Jóvenes		1.000 (.)	
Adultos		0.866 (0.109)	
Mayores		0.811 (0.159)	
Jóvenes # PTMC		1.000 (.)	
Adultos # PTMC		1.655 (0.623)	
Mayores # PTMC		0.947 (0.433)	
AMBA			1.000 (.)
Noroeste			1.412*** (0.087)
Noreste			0.968 (0.074)
Cuyo			1.352*** (0.098)
Pampeana			1.138** (0.071)
Patagonia			0.515*** (0.042)
Observaciones	20051	19224	20051

Coeficientes exponenciados; Errores estándar entre paréntesis

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (INDEC).

La tabla 1 presenta los resultados de distintas alternativas del modelo *logit*. El modelo (1) estima la asociación entre la recepción de PTMC, el género y la informalidad laboral, incorporando controles por edad, edad al cuadrado y años de educación. El modelo (2) introduce la desagregación por grupos etarios y sus interacciones con la recepción de PTMC, mientras que el modelo (3) incorpora controles regionales, permitiendo evaluar la robustez de los resultados frente a la inclusión de la dimensión territorial.

En la especificación básica, la recepción de programas de transferencia monetaria condicionada se asocia de manera positiva y estadísticamente significativa con la probabilidad de inserción laboral informal. En particular, las personas ocupadas que reciben PTMC presentan aproximadamente 2,8 veces más chances de trabajar en la informalidad que aquellas que no reciben este tipo de transferencias, manteniendo constantes el resto de las características observables. Este resultado sugiere una fuerte asociación entre la percepción de ingresos provenientes de programas sociales y la inserción en segmentos laborales no registrados, aunque no permite establecer relaciones causales.

El género muestra también un resultado significativo y persistente. Ser mujer incrementa la probabilidad de informalidad laboral en torno a un 46% respecto de los varones. Esta brecha se mantiene aún luego de controlar por edad y nivel educativo, lo que refuerza la evidencia sobre la segmentación de género del mercado de trabajo y las desventajas estructurales que enfrentan las mujeres en el acceso a empleos formales y protegidos.

El término de interacción entre PTMC y género no resulta estadísticamente significativo en esta especificación. Esto indica que el efecto asociado a la recepción de programas sobre la informalidad laboral no difiere sustancialmente entre mujeres y varones. En otros términos, PTMC y género operan de manera aditiva y no se refuerzan a sí mismos: ambos incrementan la probabilidad de informalidad, pero no se potencian entre sí en términos estadísticos.

Entre las variables de control, la edad presenta un efecto negativo y significativo, lo que implica que, a medida que aumenta la edad, disminuye la probabilidad de inserción en empleos informales. El término cuadrático de la edad es positivo, aunque de magnitud muy reducida, lo que sugiere una relación no lineal leve a lo largo del ciclo de vida. Por su parte, los años de educación se asocian de manera consistente con una menor probabilidad de informalidad, consolidándose como un factor protector frente a la inserción en empleos no registrados.

Al incorporar la dimensión etaria, también presentado en la tabla 1, incorpora la heterogeneidad por grupos etarios y su interacción con la recepción de PTMC. Los resultados muestran que, en comparación con el grupo de jóvenes (categoría de referencia), los adultos y las personas mayores presentan menores probabilidades de informalidad laboral. Sin embargo, estas diferencias no alcanzan niveles convencionales de significación estadística, lo que sugiere que, una vez controladas otras características individuales, las brechas etarias en la informalidad son relativamente acotadas.

Al considerar las interacciones entre PTMC y grupo etario, se observa que los adultos que reciben PTMC presentan mayores chances de informalidad en comparación con los jóvenes beneficiarios, con un *odds ratio* cercano a 1,66. No obstante, este coeficiente no resulta estadísticamente significativo. Para el grupo de personas mayores, la interacción con PTMC tampoco muestra probabilidades significativas. En conjunto, estos resultados sugieren que la asociación entre PTMC e informalidad podría diferir a lo largo del ciclo de vida, aunque la evidencia empírica es más débil en este punto que en el caso del género.

La inclusión de la dimensión territorial no altera sustantivamente los resultados principales. La recepción de PTMC continúa asociándose con un aumento significativo de la probabilidad de informalidad laboral, y el efecto del género se mantiene estable tanto en magnitud como en significación estadística. Asimismo, la interacción entre PTMC y género sigue sin resultar significativa, reforzando la evidencia de que no existe un efecto diferencial del programa según el sexo de la persona ocupada.

En relación con las regiones, se observan diferencias significativas respecto del AMBA, que funciona como categoría de referencia. La probabilidad de informalidad laboral es mayor en el Noroeste, Cuyo y la región Pampeana, mientras que es significativamente menor en la Patagonia,

donde las chances de informalidad se reducen a casi la mitad. La región del Noreste no presenta diferencias estadísticamente significativas en comparación con el área de referencia. Estas disparidades territoriales reflejan la heterogeneidad estructural del mercado de trabajo argentino, asociada a diferencias en la estructura productiva, el dinamismo económico y la calidad del empleo entre regiones.

Tabla 2: modelos logísticos para la probabilidad de endeudamiento informal y formal. Odds ratios. Población urbana ocupada. EPH 2025.

VARIABLES	Deuda informal	Deuda formal
PTMC	1.830** (0.0124)	1.137 (0.657)
Género	1.325*** (2.43e-05)	1.134* (0.0646)
PTMC#Género	1.350 (0.389)	0.611 (0.239)
Noroeste	1.109 (0.171)	1.138* (0.0807)
Noreste	0.595*** (1.39e-06)	0.702*** (0.000446)
Cuyo	1.437*** (1.61e-05)	1.273*** (0.00506)
Pampeana	1.293*** (0.000373)	0.975 (0.729)
Patagonia	0.671*** (6.33e-05)	0.781*** (0.00843)
Edad	1.018 (0.250)	1.027* (0.0811)
Edad ²	1.000** (0.0189)	1.000** (0.0382)
Años de educación	0.903*** (0)	0.969*** (0.000759)
Constante	0.542* (0.0555)	0.154*** (1.32e-08)
Observaciones	20,048	20,048

Valores P robustos entre paréntesis.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (INDEC).

La tabla 2 presenta los resultados de los modelos logísticos que analizan la probabilidad de endeudamiento informal y formal, incorporando como variables explicativas el género, la recepción de PTMC, su interacción y un conjunto de controles sociodemográficos y regionales. Este ejercicio permite ampliar el análisis hacia una dimensión complementaria de las estrategias económicas de los hogares, vinculada al acceso a distintas fuentes de financiamiento.

En el caso del endeudamiento informal, la recepción de PTMC se asocia de manera positiva y estadísticamente significativa con una mayor probabilidad de recurrir a préstamos de familiares o amigos. Las personas beneficiarias presentan aproximadamente 1,8 veces más chances de endeudarse informalmente que aquellas que no reciben transferencias, manteniendo constantes las demás

variables del modelo. Este resultado sugiere que los programas de transferencia monetaria no sustituyen las estrategias informales de financiamiento, sino que tienden a coexistir con ellas en contextos de ingresos insuficientes y elevada vulnerabilidad económica.

El género también muestra un efecto significativo en este tipo de endeudamiento: las mujeres presentan una mayor probabilidad de recurrir al endeudamiento informal que los varones. Sin embargo, la interacción entre PTMC y género no resulta significativa.

En cuanto a los controles, los años de educación reducen de manera significativa la probabilidad de endeudamiento informal, mientras que se observan diferencias regionales relevantes. En particular, Cuyo y la región Pampeana presentan mayores probabilidades de endeudamiento informal, mientras que el Noreste y la Patagonia muestran probabilidades significativamente menores.

Para el endeudamiento formal, el patrón de resultados es parcialmente distinto. La recepción de PTMC no resulta estadísticamente significativa, lo que sugiere que el acceso a programas de transferencia no se traduce en una mayor vinculación con el sistema financiero formal. El género mantiene un efecto positivo, aunque de menor magnitud, y la interacción entre PTMC y género vuelve a ser no significativa. Al igual que en el modelo de endeudamiento informal, la educación aparece como un factor protector, mientras que la edad muestra un efecto no lineal débil.

Tabla 3: modelos logísticos para la probabilidad de inserción laboral informal según presencia de niñas y niños menores de 10 años en el hogar. Odds Ratios. Población ocupada urbana. EPH 2025.

	(1) Sin menores de 10	(2) Con menores de 10
PTMC	2.165 (1.281)	4.081* (3.333)
Género	1.386*** (0.095)	1.578*** (0.168)
PTMC#Género	1.291 (0.510)	0.569 (0.305)
Edad	0.890*** (0.012)	0.854*** (0.023)
Edad ²	1.001*** (0.000)	1.001*** (0.000)
Años de educación	0.883*** (0.008)	0.850*** (0.014)
AMBA	1.000 (.)	1.000 (.)
Noroeste	1.425*** (0.105)	1.365*** (0.148)
Noreste	1.114 (0.101)	0.752** (0.104)
Cuyo	1.435*** (0.126)	1.205 (0.152)
Pampeana	1.180** (0.088)	1.072 (0.121)
Patagonia	0.554*** (0.054)	0.454*** (0.068)
Observaciones	14066.000	5985.000

Coeficientes exponenciados; Errores estándar entre paréntesis

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la EPH (INDEC).

La tabla 3 presenta los resultados de los modelos *logit* estimados por separado para personas ocupadas sin menores de 10 años en el hogar y para aquellas que conviven con niñas y niños pequeños. Esta vinculación permite evaluar el rol de las tareas de cuidado no remuneradas como condicionante estructural de la inserción laboral informal.

Los resultados muestran diferencias claras entre ambos grupos. Entre las personas sin menores en el hogar, la recepción de PTMC se asocia con una mayor probabilidad de informalidad laboral, aunque el coeficiente no alcanza significación estadística. En cambio, entre quienes conviven con menores de 10 años, el efecto del PTMC es más intenso y marginalmente significativo, con un *odds ratio* superior a 4. Este hallazgo sugiere que la asociación entre PTMC e informalidad se profundiza en contextos donde existen mayores demandas de cuidado.

En ambos grupos, ser mujer incrementa de manera significativa la probabilidad de informalidad laboral. No obstante, el efecto es más elevado entre quienes tienen menores a cargo, lo que refuerza la evidencia de que las brechas de género en la inserción laboral se amplifican cuando se combinan con responsabilidades de cuidado. La interacción entre PTMC y género no resulta significativa en ninguno de los dos modelos, lo que indica que no se observa un efecto multiplicativo específico de recibir PTMC siendo mujer.

En conjunto, estos resultados sugieren que la presencia de niñas y niños menores de 10 años en el hogar actúa como un condicionante estructural de la inserción laboral informal, intensificando la asociación entre PTMC e informalidad y profundizando las desigualdades de género.

6. Discusión y conclusiones

Desde el punto de vista teórico, los resultados obtenidos dialogan con tres tradiciones analíticas que estructuran este trabajo. En primer lugar, con la perspectiva de la heterogeneidad estructural latinoamericana, en tanto la persistencia de la informalidad aparece como rasgo constitutivo del estilo de desarrollo y no como anomalía transitoria. En segundo lugar, con los enfoques sobre segmentación de la protección social, que muestran cómo las transferencias monetarias no necesariamente operan como puente hacia la formalización. Finalmente, desde la economía feminista, la evidencia refuerza la centralidad del trabajo de cuidados y la división sexual del trabajo como mecanismos que reproducen trayectorias laborales precarizadas, especialmente entre las mujeres.

Los resultados empíricos permiten observar el vínculo entre PTMC, informalidad laboral y género más allá del clásico debate sobre “desincentivos al trabajo”. Lejos de indicar una retirada del mercado laboral, la evidencia sugiere que los PTMC se articulan con trayectorias laborales estructuralmente precarias, funcionando como complemento de inserciones inestables antes que como puente hacia el empleo formal.

En este sentido, los resultados dialogan críticamente con la literatura que evalúa los PTMC en términos de incentivos individuales a la oferta laboral al mostrar que la relación entre transferencias e informalidad no puede reducirse a decisiones individuales, sino que debe ser interpretada en clave estructural y relacional, atendiendo a la segmentación del mercado de trabajo y a las condiciones de reproducción social de los hogares.

La fuerte asociación entre recepción de PTMC e informalidad laboral confirma que estos programas operan dentro de un mercado de trabajo segmentado, tal como plantean Levy (2008) y los enfoques de heterogeneidad estructural de la CEPAL. Los PTMC no aparecen como dispositivos transitorios que acompañan la transición hacia la formalidad, sino como parte de un arreglo más duradero en el que amplios sectores de la población combinan ingresos provenientes del trabajo informal con transferencias estatales. Esto es consistente con la idea de Hornes (2013) sobre trayectorias laborales fragmentadas y con la evidencia de que el beneficio no sustituye el trabajo, sino que viabiliza la reproducción de hogares cuyos miembros ya están insertos en segmentos de baja productividad.

El hecho de que ser mujer incremente significativamente la probabilidad de informalidad, aun controlando por educación y edad, refuerza la interpretación desde la economía feminista: Las mujeres no solo se concentran en sectores laborales más precarios, sino que además cargan con la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado. En este marco, los PTMC (al estar diseñados en clave familiarista y dirigidos mayoritariamente a mujeres) se superponen con esta organización social del cuidado. Aunque la interacción estadística PTMC*mujer no resulte significativa, la superposición de desventajas asociadas al género y a la informalidad indica que los programas se insertan sobre una estructura laboral ya feminizada en sus segmentos más vulnerables, antes que modificarla.

La ausencia de un resultado diferencial estadísticamente significativo del PTMC según género no invalida esta lectura, sino que refuerza la idea de que el sesgo de género opera aguas arriba del programa, en la estructura del mercado de trabajo y en la organización social del cuidado. Tal como señalan Alonso y Rodríguez Enríquez (2024) y Brown (2024), los PTMC se montan sobre una feminización previa del excedente de la fuerza de trabajo, más que producirla de manera directa.

La heterogeneidad etaria introduce un matiz relevante: el mayor riesgo de informalidad entre adultos en edades centrales que reciben PTMC sugiere que estos programas se articulan con hogares que se encuentran en la etapa de mayor carga económica y de cuidados. Esto es coherente con la literatura sobre estrategias de reproducción de los hogares, donde el ingreso por transferencias permite sostener combinaciones de trabajos inestables, cuentapropismo y actividades de baja productividad. Más que un “efecto programa” sobre decisiones individuales, los resultados parecen reflejar la posición estructural de estos hogares en el mercado de trabajo.

Las diferencias regionales refuerzan esta lectura estructural. Las mayores probabilidades de informalidad en NOA, Cuyo y Pampeana, y la menor en Patagonia, muestran que la articulación entre PTMC e informalidad depende de la estructura productiva local. Esto sugiere que los programas sociales no operan en el vacío: su vínculo con la informalidad está mediado por las oportunidades laborales disponibles, lo que cuestiona cualquier lectura homogeneizadora de sus efectos.

El análisis del endeudamiento agrega una dimensión clave: la asociación entre PTMC y deuda informal, junto con la mayor probabilidad de endeudamiento entre mujeres, indica que las transferencias no solo se articulan con el trabajo precario, sino también con estrategias financieras de supervivencia. En línea con Cavallero y Gago (2019), los resultados sugieren que la protección social convive con procesos de financiarización de la vida cotidiana. La transferencia estatal, de monto limitado e inestable en términos reales, se inserta en economías domésticas que recurren al crédito (muchas veces informal) para cubrir gastos corrientes. En este marco, los PTMC no sustituyen la vulnerabilidad, sino que coexisten con un entramado de obligaciones financieras que recae desproporcionadamente sobre las mujeres.

En conjunto, los hallazgos invitan a pensar los PTMC no como política laboral, sino como pieza de un régimen de reproducción social que articula:

- empleo informal estructural,
- organización familiarista del cuidado,
- protección social no contributiva, y
- creciente financiarización de los hogares.

Desde esta perspectiva, la relación observada entre PTMC e informalidad no debe leerse como efecto conductual, sino como expresión de un modelo de desarrollo que no genera suficiente empleo formal y que delega en los hogares (y especialmente en las mujeres) la gestión cotidiana de la precariedad.

Este trabajo examinó la relación entre la recepción de PTMC, la inserción laboral informal y el endeudamiento en la Argentina, incorporando una perspectiva de género y considerando heterogeneidades etarias y territoriales. Los resultados permiten complejizar el debate sobre los vínculos de las políticas de transferencia y el mercado laboral, mostrando que su asociación con la informalidad y con determinadas formas de endeudamiento se inscribe en un contexto estructural de segmentación del mercado de trabajo y persistentes desigualdades de género.

El análisis también pone de relieve el rol central del género en la configuración de estas dinámicas. Las mujeres presentan mayores niveles de informalidad laboral y de endeudamiento, lo que refuerza la idea de que las desigualdades en el acceso a empleos formales y a mecanismos de protección social continúan siendo un rasgo estructural del mercado laboral argentino. Asimismo, las diferencias observadas entre grupos etarios y regiones subrayan la importancia de considerar el contexto institucional y territorial, así como la estructura productiva local, para comprender los vínculos entre políticas sociales, trabajo e ingresos.

Si bien el enfoque adoptado permite identificar asociaciones, el análisis no establece relaciones causales estrictas. Por lo que una línea de investigación futura relevante consiste en profundizar el análisis causal mediante estrategias cuasi-experimentales, como el uso de *Propensity score matching*, que permitan comparar individuos con características observables similares y aislar con mayor precisión el efecto de la recepción de transferencias sobre la inserción laboral y el endeudamiento.

En conjunto, los resultados de este trabajo intentan poner en debate las lecturas que atribuyen la informalidad laboral o la dependencia de las transferencias estatales a decisiones individuales, y en particular a las mujeres beneficiarias. Las trayectorias observadas remiten a desigualdades estructurales persistentes, en las que la segmentación del mercado de trabajo, la sobrecarga de cuidados y las estrategias de endeudamiento operan como mecanismos de reproducción de la exclusión. Desde esta perspectiva, los PTMC no constituyen la causa de la informalidad, sino dispositivos que atenúan parcialmente sus efectos en contextos de alta precariedad. Asumir esta lectura implica rechazar enfoques estigmatizantes sobre las personas subsidiadas y reafirmar la necesidad de políticas públicas que reconozcan el carácter estructural de las desigualdades de género y la precariedad laboral.

7. Referencias

Alonso, V. N. y Rodríguez Enríquez, C. (2024) El excedente de la fuerza de trabajo en Argentina: un análisis desde la economía feminista. *Revista Íconos*, (78): 1-21.

Arévalo, C. (2025). Cuidado Infantil en la Argentina: Estrategias de Madres Trabajadoras. Documento de trabajo RedNIE N°364.

Baird, S., McIntosh, C., y Ozler, B. (2010). Cash or condition? Evidence from a cash transfer experiment. *World Bank Policy Research Working Paper*, (5259).

Brown, B. (2024). La función de las políticas sociales en la conformación, regulación y reproducción de la fuerza de trabajo. Un análisis para la Argentina urbana del siglo XXI. *Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy*, (66), 379-403.

Bueno Castellanos, C. (2009). El rol de las mujeres en los cambios y continuidades de la economía informal. *Argumentos* (México, DF), 22(60), 211-239.

Camisassa, J. (2021). Los efectos de la informalidad laboral en los programas de transferencias condicionadas. Una revisión de la literatura empírica en Sudamérica. Trabajo final de Maestría en Economía Aplicada. Universidad Don Torcuato Di Tella.

Cavallero, L., y Gago, V. (2019). Una lectura feminista de la deuda. *Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Tinta Limón*.

Carcedo Cabañas, A., y Kennedy, M. (2017). Más allá de los ingresos: la discriminación, la violencia, las exclusiones y la pobreza que afectan a las mujeres de América Latina y El Caribe. New York: One United Nations Plaza.

Cimoli, M., Porcile, G., Primi, A., y Vergara, S. (2005). Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología en América Latina. *Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina*, 9.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Ministerio de Economía de la Argentina (2023) “Primer informe sobre endeudamientos, géneros y cuidados en la Argentina”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/58, LC/BUE/TS.2023/5), Santiago.

Costantino, A. (2024). Conservadurismo libertario y desigualdad de género en la Argentina actual. *Derecho y Ciencias Sociales*.

De Sena, A. (2020). Pobreza y programas sociales en la Argentina de las últimas décadas. En A. De Sena (Comp.), *Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales. Abanico de sentidos en América Latina, Europa y China* (pp. 101–144). CLACSO.

Federici, S. (2018). *El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo*. Madrid: Traficantes de Sueños.

Fiszbein, A., y Schady, N. R. (2009). *Conditional cash transfers: reducing present and future poverty*. World Bank Publications.

Folbre, N. (2018). *Developing care: Recent research on the care economy and economic development*. International Development Research Centre.

Garganta, S., y Gasparini, L. (2015). The impact of a social program on labor informality: The case of AUH in Argentina. *Journal of Development Economics*, 115, 99-110.

Hornes, M. E., y Maglioni, C. G. (2020) Accesibilidad y políticas sociales en la Argentina reciente: una interpretación desde los saberes expertos en programas de transferencias monetarias, en *Cuadernos de Trabajo Social*. 33(1), 77- 87.

Hornes, M. E. (2012). Los programas de Transferencias monetarias condicionadas: una aproximación desde la socio-antropología económica; Universidad de Buenos Aires. Carrera de Trabajo Social; Debate Público. *Reflexión de Trabajo Social*; 3; 5; 4-2013; 103-112

Levy, S. (2008). *Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality, and Economic Growth in Mexico*. Brookings Institution Press.

Lijterman, E. (2020). "Economía informal" y "Trabajo Decente": reformulaciones programáticas sobre el futuro del trabajo en los discursos de la Organización Internacional del Trabajo; Universidad Nacional de Santiago del Estero. Instituto de Estudios para el Desarrollo Social; Trabajo y Sociedad; XXI; 35; 7-2020; 399-427

Long, J. S., y Freese, J. (2014). *Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata*. College Station, TX: Stata Press

Marchionni, M. (2018). Brechas de Género en América Latina. Un Estado de situación. Caf Banco de Desarrollo de América Latina.

Marchionni, M., y Conconi, A. (2008). ¿Qué y a quién? Beneficios y beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas de ingresos. CEDLAS-UNLP: Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales, (76). <https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/doc-cedlas76-pdf/>

Messina, G. M. (2025). Empleo, ingresos, transferencias y pobreza en las trabajadoras argentinas (2019-2023). *Sociedad y Desigualdades*, (3), 72-89.

Minoldo, S., y Dvoskin, N. (2023) Informalidad, política social, heterogeneidades sectoriales y desigualdad de género en la Argentina durante el primer año de pandemia; Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Laboratorio; 33; 1; 7-2023; 205-236

Neidhofer, G., Laguinge, L., y Gasparini, L. (2025). The Long-Run Effects of Conditional Cash Transfers: the Case of Bolsa Familia in Brazil (No. 684).

Organización Internacional del Trabajo (1999). Trabajo decente. Memoria del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 87.^a reunión. Ginebra: OIT.

Organización Internacional del Trabajo (2002). El trabajo decente y la economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo, 90.^a reunión. Ginebra: OIT.

Paz, J. A. (2020). Introducción al estudio de la segregación ocupacional por género en la Argentina. Documentos de Trabajo RedNIE 2020-10.

Paz, J. A. (2021). La brecha de remuneraciones entre segmentos del mercado de trabajo en la Argentina. *Desarrollo y Sociedad*, (88), 239-271.

Pérez Giraldo, D. (2018). ¿Las transferencias condicionadas generan incentivos a la informalidad? UNIANDES.

Portes, A., y Haller, W. J. (2004). La economía informal. CEPAL.

Poy, S. (2021). Trabajadores pobres ante la irrupción de la pandemia de COVID-19 en un mercado laboral segmentado: el caso argentino. *Estudios del trabajo*, (62), 55-85.

Poy, S. (2024). Informalidad y trabajadores pobres en Argentina (2003-2023). *El trimestre económico*, 91(364), 809-845. Epub 24 de noviembre de 2024. <https://doi.org/10.20430/ete.v91i364.2543>

Poy, S., & Repetto, C. R. (2025). Reconfiguraciones de las políticas sociales distributivas y efectos en las condiciones de vida de los hogares (2023-2024). *Revista POSTData*, 30(2).

Rabossi, F. (2019). Los caminos de la informalidad. *Sociología y Antropología*, 9, 797-818.

Ranis, G., y Stewart, F. (2002). Economic growth and human development in Latin America. *CEPAL Review*, 78, 7–24.

Ranis, G., Stewart, F., y Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. *World Development*, 28(2), 197-219.

Staab, S. (2020). Social protection for women informal workers: perspectives from Latin America. In *The Informal Economy Revisited* (pp. 215-220). Routledge.

Tornarolli, L., y Conconi, A. (2007). Informalidad y movilidad laboral: un análisis empírico para Argentina (No. 59). Documento de Trabajo.

Trujillo-Salazar, L., y Villafañe, S. (2021). La dimensión territorial del riesgo de informalidad laboral en la Argentina (No. 47564). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge, MA: MIT Press.